

MAGALONI



El que el caso de la guardería ABC llegue a la Corte es una muestra más de que los intereses políticos siguen prevaleciendo sobre las demandas de los ciudadanos.

Hartazgo ciudadano

ANA LAURA MAGALONI

Ahora el caso de la guardería ABC está en manos de la Suprema Corte. Como ha sucedido en otros casos de grave impunidad –Lydia Cacho, Atenco, Oaxaca–, esta semana, los adoloridos e indignados padres y madres afectados decidieron tocar la puerta del máximo tribunal. Le solicitaron a los ministros que investiguen los hechos y señalen quiénes son los responsables de la muerte de sus hijos. La sola escena de los padres de familia suplicando justicia, mostrando a dos ministros fotos y recuerdos de sus hijos muertos, es desgarradora. El hecho de que este caso llegue a la Corte significa que, como muchas otras veces, los intereses políticos prevalecieron frente a las demandas más elementales de justicia de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo el sistema político mexicano va a poner en el centro de las acciones de gobierno a los ciudadanos? De esto se trata la democracia. El pluralismo partidista y los votos en las urnas, hasta ahora, no han servido para generar gobiernos al servicio de los ciudadanos.

El caso de la guardería ABC permite poner a la luz esta disociación entre elecciones y ciudadanía. Para empezar, el hecho de que la Corte esté por determinar si ejerce o no su facultad de investigación, sólo habla de la ausencia de un sistema de procuración de justicia con los ciudadanos en el centro. La Corte no es el órgano encargado ni cuenta con los instrumentos para investigar las redes de corrupción y las imperdonables negligencias que explican las pésimas condiciones de seguridad y de infraestructura con las que operaba la guardería ABC. Tampoco le toca a la Corte armar acusaciones penales y consignar a los responsables ante el juez. Estas son funciones de la procuración de justicia.

Sin embargo, al igual que en el caso de Lydia Cacho y de Atenco, en el asunto de la guardería ABC, la procuración de justicia funcionó privilegiando los intereses políticos

en juego frente a la justicia de las víctimas. Era muy arriesgado, en términos políticos, y más en plena contienda electoral, destapar la cloaca de corrupción y negligencia con la que opera el servicio de guarderías del IMSS. La investigación criminal, de las dos procuradurías involucradas, no podía ir al fondo en el asunto.

El centro de una investigación criminal independiente de los intereses políticos hubiese estado puesto en la cadena de decisiones gubernamentales, del ámbito federal y estatal, que permitió que una guardería operara en un galván, sin salidas de emergencia, sin extintores, con un techo de polietileno, con un contrato de subrogación de servicio cuestionable legalmente y un largo etcétera. ¿A dónde hubiese llegado y qué intereses hubiese tocado una investigación de este calibre?

La Procuraduría de Sonora dejó claro que era mejor ocultar el problema y se apresuró a presentar acusaciones que simulaban su “voluntad” de castigar a los responsables. El 23 de junio solicitó 13 órdenes de aprehensión a un juez penal de Sonora. ¿Contra quiénes? Pues contra los archivistas, los vigilantes, los bomberos, los encargados de la nutrición y salud de los niños. Es un acto político grotesco: frente al drama de lo ocurrido, se suma ahora la tragedia de estas pobres gentes, que nada tuvieron que ver en lo ocurrido, que ahora tienen que enfrentar un proceso penal sin dinero para contratar buenos abogados y sin jueces imparciales. Como sucede todos los días: el Ministerio Público hace que dizque investiga y el juez penal terminará convalidando sus acciones.

Ante el escándalo mediático y la indignación social que la acusación de chivos exiatorios provocó, la PGR decidió “subir”

Continúa en siguiente hoja



Fecha 04.07.2009	Sección Primera - Opinión	Página 11
----------------------------	-------------------------------------	---------------------

en el escalafón social de los acusados. Ahora también están acusados funcionarios de nivel medio del IMSS, el ex delegado regional y los propietarios de la guardería.

Sin embargo, nadie confía en la imparcialidad política y la calidad de esas acusaciones. La razón es clara: las autoridades responsables de las mismas no han dado una explicación convincente de la cadena de decisiones gubernamentales que hicieron posible que determinados intereses, complicidades y corruptelas sacrificaran la seguridad de los niños de la guardería ABC. Esta explicación no va a suceder, pues políticamente es una bomba. Muy probablemente, tales intereses, corruptelas y complicidades han operado durante mucho tiempo en el sistema completo de guarderías del IMSS. Por lo

tanto, es mejor acallar y ocultar el problema, que comenzar a solucionarlo. Para ello, una mediocre procuración de justi-

cia resulta especialmente útil.

¿Y los ciudadanos? ¿Y los miles de niños que son atendidos por el sistema de guarderías? ¿Y los padres y madres que de-

mandan justicia? ¿Y el gobierno con vocación de servicio a los ciudadanos? ¿Y la reforma a la procuración e impartición de justicia penal? Todo ello puede seguir esperando. Mientras tanto, lo único relevante para la clase política son los procesos electorales del día de mañana y el número de diputados federales, gobernadores y presidentes municipales que cada fuerza política obtenga.

Para ocultar la cadena de corrupción, intereses y complicidades en el sistema de guarderías del IMSS resulta útil una mediocre procuración de justicia.